

7. EL TURNO DE LOS VIOLENTOS*

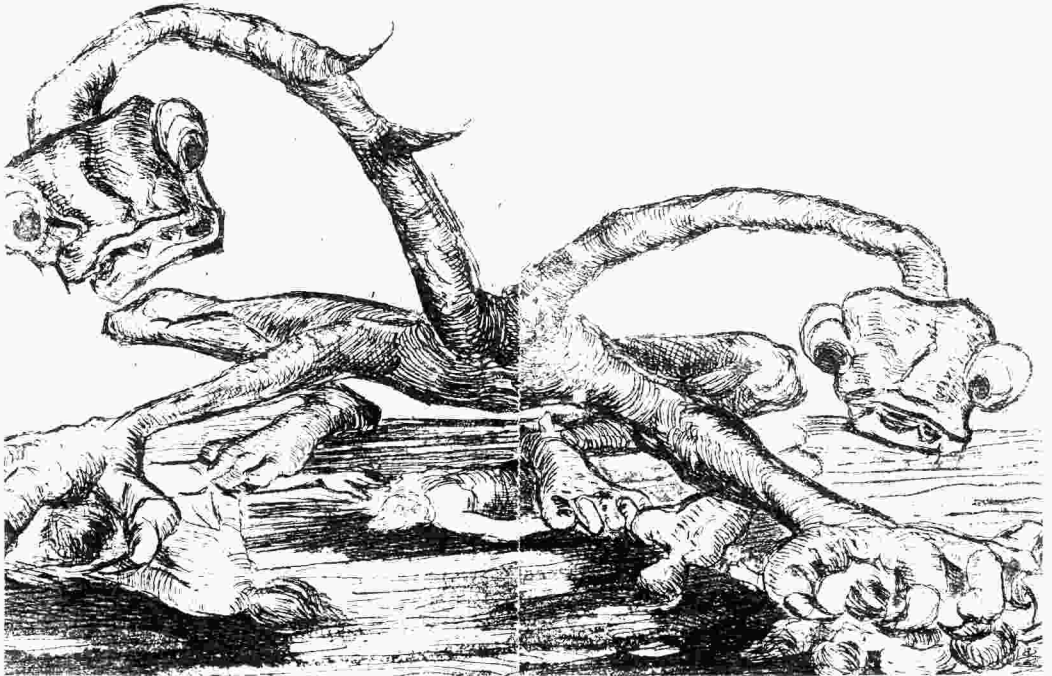
Una de las razones principales del establecimiento de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en 1967 fue la de apoyar al Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) para llevar justicia y calma a los campos colombianos más azotados por la Violencia político-económica que se había desatado sobre el país desde los años 40.

En muchas regiones, la Violencia (con mayúscula, esto es, la de Colombia en aquella terrible y única época) había adquirido la modalidad de la usurpación despiadada de tierras de otros, los de miembros del partido contrario. Por lo mismo, no podía armonizar bien con los ideales comunitarios y desarrollos históricos de la lucha por la tierra como los hemos venido estudiando, así tuviera aspectos cruentos. En esta forma la Violencia rompió una tradición regional y abrió compuertas para transformaciones inesperadas en el agro (no necesariamente revolucionarias), muchas de ellas inconvenientes para los trabajadores directos.

La Violencia tuvo la particularidad, en nuestra región, de que fue empleada por los latifundistas —liberales y conservadores por igual— para apoderarse de fincas que los colonos venían trabajando en tierras de frontera agrícola. En efecto, desde comienzos del presente siglo se había empezado a registrar una nueva ola de

* El apoyo conceptual de este capítulo descriptivo se encuentra en el capítulo 1B del tomo II de esta serie, al tratar el papel de la violencia y la subversión en la sociedad y la acción política. Para evitar duplicación, pido al lector referirse a aquel capítulo en relación con lo ocurrido en la Costa atlántica durante los años de la violencia y su interpretación teórica global.

colonización hacia el sur, esta vez proveniente de los pueblos ya establecidos por la ola anterior en el valle del Sinú, de familias que buscaban de nuevo la montaña virgen con la tradicional práctica de la tumba y quema. Eran las familias triétnicas usuales de los pobres del campo, complementadas por comerciantes siriolibaneses, que seguían huyendo de los ejércitos y de la violencia política para reproducir la cultura anfibia, como lo habían hecho antes los Mier y tantos otros en la isla de Mompox y en las Tierras de Loba. Esta vez huían de la matrícula, del concertaje y de la explotación hacendil del “blanco”, en busca de la independencia económica y personal. Entonces empezaron a fundarse pueblos nuevos en el alto Sinú y San Jorge como Valencia, Tierralta y Montelíbano (tomo III).



La mariapalito (mantis) bicéfala, cuyas cabezas representan los partidos tradicionales, símbolo de la Violencia en Colombia.

Por desgracia, en esas mismas tierras nuevas, aquellos resuel-
tos y productivos colonos y comerciantes se encontraron inesper-
adamente envueltos en el peor de los conflictos civiles del presen-

te siglo en Colombia. Cayeron en lo que venían evitando: al cabo de una generación, les esperaban los festones negros en las casas y la mariapalito bicéfala de la Violencia. Quedaron envueltos en ella, mordidos por sus dientes de sierra. Porque la Violencia fue un arma de la reacción empleada por grupos y personas de las clases capitalistas y terratenientes regionales que querían aprovechar el caos y el terror para apropiarse de las tierras del alto Sinú y San Jorge (y también de sabanas y de la depresión momposina), sin las dificultades y cortapisas sociales y legales que venían experimentando al tratar de expandir sus propiedades, sea con escrituras ficticias o mediante la dura aplicación de la “ley de los tres pasos” que llevaba a consolidar las fincas pequeñas desmontadas para convertirlas en haciendas ganaderas. La Violencia fue, pues, empleada como acelerador del proceso de acumulación capitalista en el agro costeño, hasta en los confines de la frontera agrícola.

Un caso claro y dramático fue el de Juana Julia Guzmán en Lomagrande, con sus raíces en el socialismo de los años veinte, que destaca lo inerme de las gentes del campo y la debilidad de su organización para fines de defensa colectiva. Dejemos que ella misma lo describa, cuando al fin se decidió a contar su vida el 23 de mayo de 1972:

“Cuando expulsaron a Adamo quedé al frente de las organizaciones de hombres y mujeres, yo sola luchando. Empezaron los ataques contra mí. Yo gracias a Dios siempre con la ley me defendía de todos ellos. Conté con la ayuda del abogado Miguel Pastrana que a cada rato apelaba a la Ley 200 (de 1936) y a que el título del campesino era el hacha y el machete. Pero después fuimos decayendo, decayendo. Ya no pude sostener el Centro Obrero en la ciudad y me pasé a Lomagrande con los campesinos. En 1951 la Violencia se metió a matarme. Allá en el monte me pusieron en un cepo toda una noche aguantando mosquitos. Al día siguiente se presentó un camión con la policía. Me sacaron del cepo con dos compañeros más (Julián Díaz y Zenón Bonilla) y nos embarcaron para Montería, dicen que por no matarme en el mismo Lomagrande... Un teniente Torralvo mandó a un civil a buscar una lata de gasolina para echármela a los pies y prenderme viva. Habían hecho tantos crímenes ahí, puesto que se veía la sangre en el patio de gente que después tiraban al caño. Pero entonces llegó el alcalde y nos puso treinta pesos de multa a cada uno. Los muchachos buscaron la multa y la pagaron por nosotros. Salí de la cárcel pero no pude regresar a Lomagrande porque allá tenía la persecución, con la policía que si yo llegara que se me diera

muerte. Entonces me quedé en Montería, en la casa de Antonio Sossa, y vendí mis tres acciones [de la Sociedad].”

No fueron pocas las dificultades que siguieron a Juana Julia como guardiana de la cárcel (por favor de un amigo), como ventera y por fin arrimada en casa de una compañera de donde empezaron a llevarla a cultos evangélicos. Dificultades parecidas ocurrieron a todos menos seis de los pequeños colonos de Loma-grande, quienes tuvieron que salirse de sus tierras amenazados por los terratenientes. Los resultados son claros: de las 175 familias originales, hoy apenas quedan algunas casitas del viejo Baluarte Rojo que fundara Adamo, todas ahogadas por los poteros de las familias monterianas de Kerguelén y Giraldo, cuyas cercas llegan hasta los patios de las chozas. El latifundio ganadero gozó aquí de su violenta orgía y se quedó con todo, impune y soberbio.

La relación capitalista expansiva entre Violencia y tierra observada en los departamentos del interior del país en etapas más avanzadas del conflicto, se desbordó hacia las zonas montañosas del alto Sinú y San Jorge con la llegada casi simultánea de terratenientes antioqueños y colonos antioqueños, sinuanos y sabaneros. Tukurá, Tierralta, Juan José, Montelíbano y Uré, sitios fronterizos de este choque y encuentro de estas gentes disímiles, fueron teatro de masacres campesinas realizadas por “pájaros” a sueldo de propietarios generalmente conservadores (Parra, Atencia, Marchena) que ansiaban ampliar las tierras que empezaban a “civilizar”. Haciendas tales como Chimborazo, Venecia, La Esmeralda, Guadalajara y La Florida se agrandaron con este tipo de violencia patológica, y sobre ellas empezaron a volar constantemente lauras, goleros, alguaciles y reyes gallinazos. El antiguo baluarte de Adamo en Canalete (Nueva Galia) se derrumbó en sangre y sus miembros fueron dispersados; de ellos queda el tétrico testimonio de una fotografía de cabezas decapitadas y el recuerdo de un florisanto en cuyas ramas se mecían los ahorcados. Algo similar ocurrió en Callejas.

No sorprende, por lo mismo, que hubiera surgido en el alto Sinú, Canalete y El Carmelo la contraviolencia personificada en la guerrilla liberal, que quedó plasmada principalmente en las bandas del loriquero Mariano Sandón y Tiburcio León, campesinos valientes que asumieron el papel de defensores de la vida y bienes de sus copartidarios. (En el resto de la región estudiada, que se sepa, sólo apareció una guerrilla liberal en la Cansona, cerca de El Carmen de Bolívar, comandada por un Cueto; y otra en Lomaverde comandada por Alejandro Fuentes, ex soldado, con

combate en Cañaflechas. Ambas guerrillas también tuvieron una vida relativamente corta).

También se organizó un Sindicato de Trabajadores del Alto San Jorge en 1958 con el fin de defender lo que quedaba de las tierras colonizadas y de tratar de recuperar las que estaban siendo usurpadas "a punta de yatagán y boca de escopeta" por hacendados, especialmente por el sanmarquero Leonardo Seña. Lo lograron en unos veinte sitios donde fundaron caseríos y explotaciones propias, pero a costa de un mayor conflicto, al cual los gobernantes de Montería (liberales y conservadores) se hicieron los ciegos y sordos. También se hizo a un lado el INCORA a pesar de su mandato, cuyos directivos inauguraron en cambio, a todo timbal, proyectos de riego y redistribución de la tierra en las partes más accesibles del Sinú medio (Cereté, Montería, Ciénaga de Oro). Una intervención militar de violencia institucional a favor de Seña se frustró por la inesperada muerte de éste (de un infarto) en julio de 1965. Ello no impidió la persecución al Sindicato y sus directivas hasta prácticamente eliminarlo.

Tal situación de agudos conflictos llevó a partir de 1968 a la aparición en la región de una guerrilla nueva, de naturaleza ideológica, la del Ejército Popular de Liberación (EPL), el brazo armado del Partido Comunista Marxista-Leninista constituido cuatro años antes en Medellín por intelectuales y estudiantes. Así plantada regionalmente la Idea por elementos externos a la región, consecuente con los postulados campesinistas de Mao Tsetung, se constituyó una Junta Patriótica Regional del Sinú y San Jorge, presidida por el colono Julio Guerra Toro, de origen antioqueño (de Dabeiba, municipio igualmente signado por la Violencia), pero nacido en Juan José en 1910, quien había formado parte del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL).

Con la continua ausencia del INCORA en la región, la Junta divulgó un programa de quince puntos, uno de los cuales proclamó la "reforma agraria revolucionaria" con expropiación de tierras sin indemnización y entrega gratuita de lotes a los campesinos, tal como lo había propuesto cinco años antes el padre Camilo Torres Restrepo con su Frente Unido. En desarrollo de este principio de contraviolencia, se hizo la ocupación de haciendas que, como la de Santa Clara (de los Ospinas), se habían consolidado por la violencia o habían colaborado con el Ejército. De paso también destruyeron campamentos de la Corporación del Valle del Magdalena y del Sinú y de la campaña antimalárica, por sospecha de espionaje.

Un contingente del EPL (distinto de otro sectario que efectuó exacciones antipopulares todavía recordadas con rechazo por el pueblo) continuó dominando en esta región con los fines descritos y con apoyo del campesinado local. No se llegó, que se sepa, a ninguna etapa política avanzada de "república independiente" como las de El Pato y Guayabero en el sur del país, con el establecimiento de formas comunitarias de explotación de la tierra o desarrollo de principios socialistas determinados. Los campesinos siguieron explotando fincas individuales. En cambio, a pesar de la incidencia guerrillera, los terratenientes lograron consolidar muchas de las nuevas haciendas formadas por el terror, o se ampliaron las fincas existentes por la persecución o por la "ley de los tres pasos", consagrando así el monopolio de la tierra. Disminuyó el número de colonos independientes y de pequeñas fincas sin beneficiar a los pobres, y la formación social no se afectó realmente. Tal fue el costo negativo de la Violencia en esta región, aunque se avanzó en conciencia organizativa y revolucionaria de clase a nivel popular.

No es necesario detallar los enfrentamientos producidos por el sectarismo político y los "odios heredados" en nuestra región durante la primera ola de este período, sectarismo y odios que mantenían divididas e impotentes a las clases bajas. Los hubo entre Pinillos (liberal) y Palomino (conservador), por ejemplo; y entre liberales y conservadores a partir del 9 de abril de 1948 en Mompo, Sincelejo, Corozal, Ovejas, Chinú, San Antero, Lórica y Montería donde a los liberales se les castigaba echándolos en un tanque de agua al pie de un mango. Pero aquellos incidentes armados no pasaron a mayores y los costeños de aquellos lugares lograron imponer su expansiva y tolerante idiosincrasia, para detener la peligrosa espiral de la Violencia. En San Martín de Loba, los unos y los otros se pusieron de acuerdo para sacar del pueblo a un cabo que había sido enviado expresamente por las altas autoridades del departamento y la nación, en escalofriante despliegue de violencia reaccionaria, para imponer ideologías fascistas. En otras partes los "chulavitas" que llegaban del interior del país con uniformes de policía fueron poco a poco neutralizados, como pasó en Ayapel luego de dos asesinatos, y en el alto Sinú con El Diablo y el teniente Jiménez, alias Bocanegra.

En este sentido pudo haber aquí un colapso parcial del Estado porque sus agentes o eran ineficaces (como el INCORA) o eran desconocidos en su autoridad, o pretendieron ejercer funciones que desbordaban sus papeles normales o corrientes. También hubo fallas en las Iglesias, por falta de pastores y párrocos

esclarecidos en la nueva teología de la liberación, como veremos más adelante. En general, la baja incidencia de la Violencia en la Costa en comparación con el resto del país podía haber sido anticipada. No podía ser menos. En la tierra de los dejaos y de la informalidad, la del código paralelo de la Sierra Flor, la del ethos del mamagallismo y del vivir y dejar vivir, la Violencia no podía enraizarse ni dejar las incurables heridas de otras partes.

No obstante, las injusticias en el uso y distribución de los principales recursos naturales —la tierra y el agua— seguían y han seguido campantes. Ha quedado el lastre sangriento de la violencia estructural, aquella expresada en la pobreza, el hambre, la ignorancia y la enfermedad de las mayorías regionales. Y ello sí ha dado pie para la movilización masiva de los grupos campesinos y de sus aliados de otras clases sociales, que se encontraron todos en la ANUC para dar una inolvidable batalla por la justicia y contra los abusos y monopolios de los poderosos.

APÉNDICE

DATOS-COLUMNAS DE ESTE CAPÍTULO

Fin de Lomagrande, Canalete y Callejas: Entrevistas con Juana Julia Guzmán y otros, 1972; Centro Popular de Estudios, *Lomagrande*; Negrete, *Origen*, 120-125, incluye fotografía de decapitados en Canalete.

Sindicato de Trabajadores del Alto San Jorge: Entrevistas con Benjamín Lancheros, dirigente del mismo, Montería, 1982; Víctor Negrete y Roberto Yances T., *Montelibano: pasado y presente* (Montería, 1981), 67-74; Ghilodes, 326-328.

Julio Guerra, EPL y Junta Patriótica Regional: Ghilodes, 395-401; Negrete y Yances, 55-64; Víctor Negrete y Luis A. Garabito, *Puerto Libertad: pasado y presente* (Montería, 1985), 83-90. Cf. José Francisco García Tordecillas, *Causas y efectos de la violencia en el Alto Sinú* (Montería, 1976).

Es interesante comparar, con más detalle que el ofrecido de manera preliminar en este capítulo, los hallazgos a nivel regional en Córdoba con los del Tolima, como lo hace James Henderson, *Cuando Colombia se desangró: un estudio de la Violencia en metrópoli y provincia* (Bogotá, 1984); y Alfredo Molano, *Los años del tropel, relatos de la Violencia* (Bogotá, 1985) excelente libro que es además otra aplicación de la técnica de la imputación propuesta en la IAP (tomo I de esta serie). Así se rompe con la rutina teórica que ha surgido de los estudios generales de la Violencia y se adelanta en la comprensión de sus factores y condiciones reales. Puede ser que continúe esta saludable tendencia de regionalizar el estudio de tan importante proceso. Cf. Russell W. Ramsey, "Critical bibliography on La Violencia in Colombia", *Latin American Research Review*, VIII, No. 1 (primavera 1973), 44; Paul Oquist, *Violencia, conflicto y política en Colombia* (Bogotá, 1978), introducción.